

## La corrupción política y su institucionalidad dentro de la función pública pre, durante, post emergencia sanitaria: Propuestas causticas procedimentales

Carlos Enrique Coloma Johnson<sup>1\*</sup>, William Mariano Temoche Espinoza<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Escuela de Posgrado. Universidad César Vallejo. Perú.

\*Autor para correspondencia: Carlos Enrique Coloma Johnson, coloma0306@gmail.com

(Recibido: 28-04-2023. Publicado: 07-06-2023.)

DOI: 10.59427/rcli/2023/v23cs.548-557

### Resumen

*El estudio tiene como objetivo: Describir la Corrupción Política y su institucionalidad dentro de la Función Pública pre, durante, post emergencia sanitaria, a fin de formular propuestas Causticas Procedimentales; es que, la corrupción es un problema con significativa influencia en la política y la economía de un país. Para combatirla es necesario fortalecer las instituciones y la transparencia, así como fomentar una cultura ética y de valores en los líderes políticos. Es necesario implementar medidas de transparencia y fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción para abordar este problema de manera efectiva. La metodología es de enfoque cualitativo, diseño propositivo, nivel descriptivo, tipo básico que utilizó la técnica de análisis documental. La conclusión es que, es necesario implementar medidas efectivas para abordar las causas y consecuencias subyacentes de la corrupción. Se plantea su causticidad a nivel normativo y ejecutivo como la Muerte Civil a funcionarios corruptos y la deshonra pública.*

**Palabras claves:** *Corrupción institucionalizada, tratamiento en emergencia nacional y Muerte Civil.*

### Abstract

*The objective of the study is to: Describe Political Corruption and its institutionality within the Public Function before, during, and post-sanitary emergency, in order to formulate Caustic Procedural proposals; is that corruption is a problem with significant influence on the politics and economy of a country. To combat it, it is necessary to strengthen institutions and transparency, as well as foster a culture of ethics and values in political leaders. It is necessary to implement transparency measures and strengthen the institutions that fight against corruption to address this problem effectively. The methodology is of a qualitative approach, purposeful design, descriptive level, basic type that used the documentary analysis technique. The conclusion is that it is necessary to implement effective measures to address the underlying causes and consequences of corruption. Its causticity is raised at the regulatory and executive level as Civil Death to corrupt officials and public dishonor.*

**Keywords:** *Institutionalized corruption, treatment in national emergency and Civil Death.*

## 1. Introducción

En el 2022, el 34,0% de la población peruana percibe que lo más resaltante de una democracia es la libertad de expresión; el 33,4% es el derecho de toda persona; y el 17,7% unas elecciones limpias y transparentes. A nivel de urbano el 34,7% considera a la libertad de expresión más importante; en el rural 39,2% el señala más importante el respeto a los derechos de todas las personas. (INEI, 2022). En esa línea, es interesante la data de la corrupción como un problema que ha afectado a la sociedad desde hace mucho tiempo. Se trata del abuso de poder para obtener beneficios personales o para terceros, lo que ha generado graves consecuencias en la política y la sociedad. Esta corrupción continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía y se manifiesta de diferentes maneras, al 2022, el 2,5% de los hogares consultados, reportaron que a un miembro de su hogar le solicitaron “un pago extra” al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas. En el área urbana (2,7%), que en la rural (1,8%). Según sexo, los hombres son los que más reportaron incurrir en esta práctica (2,9%), siendo menor en las mujeres (2,1%) (INEI, 2022). Según opinión de la población entre las instituciones que tienen un alto nivel de desconfianza ciudadana, se ubican los partidos políticos, seguido por el Congreso de la República y el Gobierno Regional. A excepción de la Radio y Televisión, y la Prensa Escrita, todas las instituciones ubicadas en el grupo de instituciones no confiables pertenecen al sector público. La Municipalidad Distrital tiene una tasa de desconfianza de 81,5% y la Municipalidad Provincial de 79,5%, teniendo presente que más de la mitad de la población (51,1%), considera a la corrupción como la principal preocupación (INEI, 2022), nótese el alto grado de desconfianza en los funcionarios que implica una percepción geoméricamente desproporcional a lo positivo.

La pandemia de COVID-19 ha sido un desafío para todo el mundo. Los gobiernos de todo el mundo han tenido que tomar medidas para prevenir la propagación del virus y proteger a su población. En Perú, el gobierno declaró estado de emergencia sanitaria en marzo de 2020, lo que significó la restricción de la movilidad de las personas y la suspensión de muchas actividades económicas. Sin embargo, la corrupción de los funcionarios públicos ha sido un problema en el manejo de la crisis sanitaria, lo que ha generado indignación y preocupación en la sociedad. La corrupción es un problema que ha estado presente en Perú durante décadas. En los últimos años, el país ha sido sacudido por varios escándalos de corrupción de alto perfil, como el caso Lava Jato, que involucró a políticos y empresarios en el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas. Sin embargo, durante la pandemia, se han reportado casos de corrupción específicamente relacionados con la adquisición de suministros médicos y la distribución de ayuda humanitaria. (Shack, 2021). Uno de los casos más destacados fue el llamado “Vacunagate”, que involucró a varios funcionarios de alto nivel que recibieron la vacuna COVID-19 antes de que les correspondiera según el plan de vacunación del país. Además, se reveló que algunas personas habían recibido la vacuna a cambio de favores políticos o económicos. Este caso surgió una gran indignación en la sociedad peruana, que ya estaba cansada de la corrupción y la impunidad. (Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 2022). Otro caso importante fue el de la adquisición de ventiladores mecánicos por parte del Ministerio de Salud. Se descubrió que los ventiladores que habían sido comprados no eran los adecuados para tratar a pacientes con COVID-19 y que habían sido sobrevalorados en comparación con su precio de mercado. También hubo casos de empresas que recibieron contratos para suministrar suministros médicos a pesar de no tener experiencia en el área o de no haber cumplido con los requisitos necesarios. (Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 2022). Estos casos de corrupción tienen graves consecuencias para la sociedad peruana. En un momento en que el país se enfrenta a una crisis sanitaria y económica, la corrupción disminuye la capacidad del gobierno para responder de manera efectiva a la pandemia y genera un sentimiento de desconfianza en la población hacia sus líderes políticos. Además, la corrupción en el manejo de la pandemia significa que los recursos dedicados a combatir la enfermedad no se utilizan de manera efectiva y que las personas más necesitadas no reciben la ayuda que necesitan.

Para abordar la corrupción en el manejo de la pandemia, debería ser de necesidad el fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción, como la Fiscalía y la Contraloría General de la República (autónomas sin presiones políticas). También se deberían implementar medidas de transparencia en la adquisición y distribución de suministros médicos y ayuda humanitaria. Por ejemplo, se podría haber establecido un sistema de monitoreo en línea para que la sociedad pueda supervisar el proceso de adquisición y distribución de suministros médicos y se debería hacer público los contratos firmados por el gobierno. También, si fuera el caso de una nueva coyuntura, es necesario fortalecer la educación y la cultura de la integridad para fomentar valores éticos. En cuanto a la corrupción de funcionarios públicos, este tiene graves consecuencias para la sociedad, ya que mina la confianza en las instituciones públicas y disminuye la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades y satisfacer las necesidades de la población. La corrupción pública también afecta el uso eficiente de los recursos y puede desviar fondos que se necesitan desesperadamente para programas de salud, educación y otros servicios sociales. En el caso de Perú, la corrupción ha sido un problema persistente en el país y ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social. La corrupción también ha sido un obstáculo para la consolidación de la democracia en el país. (Fondo Monetario Internacional, 2018) A lo largo de los años, hubo varios escándalos de corrupción en Perú que han involucrado a políticos y funcionarios públicos, lo que ha generado una gran indignación en la sociedad y ha socavado la confianza en el gobierno. Un ejemplo pre pandemia de los graves efectos de la corrupción en Perú fue el caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia (IDEHPUCP), quienes fueron acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Este caso fue uno de los más importantes de la Operación Lava Jato, que investigó la corrupción en América Latina (Durand, 2019). El caso involucró a varios

líderes políticos y empresariales en el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas en varios países de la región. En Perú, el caso involucró a varios expresidentes y otros funcionarios públicos, lo que siguió una gran indignación en la sociedad y llevó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo ahora que el expresidente Alejandro Toledo está en franco proceso de extradición de los Estados Unidos pese a las acciones dilatorias (CNN-español, 2023), que por las pruebas entraría a una prisión preventiva. El objetivo de la investigación es describir la corrupción política y su institucionalidad dentro de la Función Pública pre, durante, post emergencia sanitaria, a fin de formular propuestas Causticas Procedimentales.

## 2. Metodología

El estudio cualitativo se centra en la cualificación desde su enfoque jurídico a, no solo, el comprender el fenómeno de la corrupción política, sino en cuanto a un nivel descriptivo de tipo teórico con la técnica del análisis documental, esto para fundamentar la perspectiva de autor en su interpretación y significado contextual (Hernández & Mendoza, 2018).

Es estudio es de un diseño propositivo porque fundamenta una propuesta al fenómeno de la corrupción institucionalizada, pre, durante y pospandemia sanitaria por el COVID 19, a partir de un análisis situacional de la realidad peruana. La información recogida fue sometida a un proceso de análisis de datos cualitativos, cuyos resultados obtenidos fueron contrastados con la literatura socio jurídica que la relevancia del estudio son as propuestas socio jurídicas (Hernández y Mendoza, 2018).

## 3. Resultados

### **La corrupción institucionalizada y factores que contribuyen**

La corrupción es un fenómeno complejo que tiene múltiples factores que contribuyen a ella. Uno de ellos es la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos. Cuando no hay claridad pública en la gestión de los recursos, se abren espacios para que se den prácticas corruptas. Además, la debilidad de las instituciones y la impunidad también son factores que contribuyen a la corrupción, ya que las personas sienten que pueden cometer actos corruptos sin ser castigados. (Contraloría General de la República, 2019) Finalmente, la cultura de la corrupción también influye, ya que, si se percibe que las prácticas corruptas son comunes y aceptables, esto puede llevar a que más personas las lleven a cabo (World Bank, 2017). En el caso de la corrupción política, pueden contribuir factores como la presión de grupos de interés y la falta de ética y valores en los líderes políticos (Tanzi, 1998). En algunos casos, la pandemia ha llevado a un aumento en los niveles de corrupción política. (Transparencia Internacional, 2023) Existen varios tipos de corrupción que se pueden identificar en la sociedad actual. Entre ellas se encuentra la corrupción política, que consiste en el uso indebido del poder político para beneficio propio o para terceros. También está la corrupción empresarial, que se refiere a las prácticas corruptas llevadas a cabo por las empresas para obtener ventajas competitivas. Por otro lado, se encuentra la corrupción judicial, que ocurre cuando los jueces o funcionarios judiciales reciben sobornos para dictar fallas a favor de una de las partes involucradas (Kolstad y Wiig, 2016). En sí, la corrupción política se refiere a la utilización del poder político en beneficio propio o de terceros, y es considerada como uno de los tipos más graves de corrupción (Argandoña, 2016).

Es que, las causas de la corrupción política son múltiples y complejas. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se pueden identificar varios factores que están contribuyendo a la corrupción política. Uno de los principales factores es la necesidad de tomar decisiones rápidas y eficaces en un entorno altamente incierto y cambiante. La crisis sanitaria ha generado un nivel de urgencia sin precedentes, lo que ha llevado a algunos gobiernos a tomar medidas extremas y poco transparentes. Este tipo de decisiones, tomadas en momentos de crisis, a menudo se llevan a cabo sin el escrutinio adecuado y pueden generar corrupción. Otro factor que contribuye a la corrupción política en tiempos de COVID-19 es el aumento de la demanda de ciertos bienes y servicios esenciales, como los equipos de protección personal, los ventiladores y otros suministros médicos. La escasez de estos productos ha llevado a algunos actores a aprovechar la situación para obtener ganancias ilícitas. Los precios de estos productos esenciales han alcanzado exponencialmente y algunos han sido vendidos en el mercado negro a precios extremadamente altos. Además, la pandemia ha creado una situación en la que los recursos estatales se han utilizado en gran medida para financiar la respuesta a la crisis sanitaria. Esto ha llevado a algunos actores políticos a tratar de desviar estos recursos para sus propias multas. La falta de supervisión y control adecuada ha permitido que se produzcan casos de corrupción.

Una de las principales causas de la corrupción es la falta de transparencia en el gobierno y las empresas. La falta de transparencia permite que los funcionarios públicos y los empresarios se involucren en actividades corruptas sin ser detectados. La transparencia es esencial para la rendición de cuentas y la responsabilidad, y cuando falta, es más probable que se produzcan actos de corrupción. En el caso del Perú, la falta de transparencia en la gestión de las finanzas públicas ha sido un problema persistente. La falta de información clara y accesible sobre

el uso de los recursos públicos ha permitido que los funcionarios públicos se involucren en actividades corruptas sin ser detectados. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha sido un problema persistente que ha contribuido a la corrupción en el gobierno (González, 2017). Correlativamente la corrupción se presenta ante la ineficaz regulación y supervisión efectiva. La falta de regulación y supervisión adecuada en el gobierno y en las empresas permite que los funcionarios públicos y los empresarios se involucren en actividades corruptas sin ser detectados. En el Perú, la falta de supervisión y regulación efectiva ha sido un problema persistente en la gestión de las finanzas públicas y en la gestión empresarial (visto desde un punto de vista de gestión pública, porque el Estado constitucionalmente no puede ejercer iniciativa empresarial).

La falta de transparencia y rendición de cuentas es significativa, es que, cuando los ciudadanos no pueden acceder a información sobre las decisiones y acciones del gobierno, es más fácil para los funcionarios públicos actuar en su propio interés. Además, cuando los funcionarios públicos no rinden cuentas por sus acciones, es menos probable que enfrenten consecuencias por su comportamiento corrupto. Es muy común aseverar que entre las causas de la corrupción está la baja remuneración de los funcionarios públicos. Cuando los salarios de los funcionarios públicos son bajos, es más probable que se sientan tentados a aceptar sobornos o a buscar otras formas de enriquecimiento personal. En Perú, la falta de una remuneración adecuada para los funcionarios públicos ha sido identificada como una causa de la corrupción (Munck, 2018).

Sin duda la causa común de la corrupción es la falta de una cultura ética en el gobierno y en el empresariado. Cuando los líderes políticos y empresariales no tienen una base ética sólida, es más probable que se involucren en actividades corruptas. En el Perú, la falta de una cultura ética sólida ha sido un problema persistente en la política y los negocios. La falta de responsabilidad y el incumplimiento de los compromisos han sido un problema común en la política y la gestión empresarial en el país. Esta carencia de cultura de integridad y ética también contribuye a la corrupción. Cuando la sociedad tolera o incluso promueve comportamientos corruptos, es más difícil para los funcionarios públicos resistir la tentación de actuar de manera corrupta. En Perú, la falta de una cultura de integridad ha sido identificada como un problema que contribuye a la corrupción (Sánchez, 2017).

La pandemia por covid-19 y la corrupción a nivel de las Fuerzas Armadas Sin duda la problemática mundial a raíz del covid-19 ha tenido un impacto significativo en el mundo entero, incluyendo en las fuerzas armadas. En muchos países, los militares han tenido un papel importante en la respuesta a la pandemia, lo que ha llevado a una mayor reserva de recursos y presupuesto para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, también se han reportado casos de corrupción en el manejo de estos recursos asignados, y las fuerzas armadas no han sido la excepción. En el Perú, se han reportado varios casos de corrupción en el manejo de presupuesto asignado para la respuesta a la pandemia por parte de las fuerzas armadas. Uno de los casos más sonados fue el de la adquisición irregular de ventiladores mecánicos por parte del Ministerio de Defensa, que involucró a altos mandos militares y funcionarios del gobierno (BBC, 2020). Otro caso involucró la adquisición de alimentos y suministros médicos por parte de la Marina de Guerra, que también fue objeto de una investigación por presuntas irregularidades (El comercio, 2020).

La corrupción en las fuerzas armadas durante la pandemia puede atribuirse a varias causas. Una de ellas es la falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos asignados. En muchos casos, los procesos de compra y contratación se han llevado a cabo sin la debida publicidad y sin la participación de la sociedad civil en la supervisión de los procesos. Además, la falta de controles internos efectivos y la debilidad en los sistemas de supervisión y fiscalización también han permitido la comisión de actos de corrupción. Como causa de la corrupción en las fuerzas armadas durante la pandemia es la presión y la urgencia de la situación. La rápida propagación del virus y la necesidad de responder rápidamente ha generado una demanda urgente de recursos y suministros médicos, lo que ha llevado a una mayor tentación de cometer actos de corrupción. Es así que la pandemia sanitaria ha agudizado la corrupción de funcionarios en el manejo de presupuesto asignado en las fuerzas armadas. La falta de transparencia y rendición de cuentas, la debilidad en los sistemas de supervisión y fiscalización y la presión de la situación son algunas de las causas que han permitido la comisión de actos de corrupción en este contexto. Es necesario tomar medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos asignados para la respuesta a la pandemia, y asegurar que los fondos destinados para este fin sean utilizados de manera efectiva y eficiente para beneficio de la sociedad.

### **Consecuencias de la corrupción política durante emergencia sanitaria**

La corrupción política en tiempos de COVID-19 puede tener graves consecuencias para la sociedad y la economía. Por un lado, la corrupción debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la democracia. Además, la corrupción puede llevar a la pantalla ineficiente de recursos, lo que puede afectar negativamente la capacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales a la población. Además, la corrupción puede tener un impacto negativo en la inversión extranjera y en el crecimiento económico.

Para combatir la corrupción en tiempos de COVID-19, debió ser necesario fortalecer los sistemas de control

y supervisión y promover la transparencia en la toma de decisiones. Es fundamental que los gobiernos se comprometan a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos y en la contratación de servicios esenciales. También es de necesidad promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, para garantizar que los ciudadanos puedan supervisar y monitorear las decisiones y acciones de las autoridades; en ese sentido la Contraloría General de la República del Perú señaló que la capacidad limitada para monitorear a los ciudadanos. Además de estos riesgos, las medidas de confinamiento y distanciamiento social impuestas como parte de la emergencia nacional por el COVID-19 han limitado significativamente la capacidad de los ciudadanos para ejercer el control social. Con la suspensión temporal de actividades introducida por diversos órganos de gobierno, la introducción del trabajo a distancia y la suspensión de plazos para los trámites administrativos, la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y a las quejas, reclamos y denuncias se redujo considerablemente. (Shack & Porras, 2020).

En realidad, la flexibilidad del proceso de contratación y alta volatilidad de los precios de mercado y disponibilidad de entrega de bienes y servicios por cuanto la declaración de emergencia sanitaria se acompañó de normativas (Decretos de Urgencia), que permitió a la burocracia en entidades públicas a recurrir a la contratación directa de bienes, servicios y obras, dentro de la Ley de Contrataciones del Estado. Sobre el alcance de la corrupción y la mala conducta funcional en el período no pandémico, podemos indicar que, según lo calculado por Shack et al (2020) en 2019, cuando la pandemia de COVID-19 aún no había llegado a Perú y no había estado de emergencia nacional, alrededor del 15 % de los la ejecución presupuestaria anual se perdería cada año por los daños al estado causados por la corrupción y las malas prácticas, observándose diferencias significativas entre los niveles de gobierno donde los gobiernos subnacionales acumulan una mayor proporción de pérdidas en comparación con el gobierno nacional. Puntos ya establecidos a nivel internacional y asumidos al menos identificados (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 2019).

Hay que sumar el marco regulatorio inadecuados relativo a un estudio reciente sobre el diagnóstico de riesgos en las compras públicas, publicado por la Inspección de Contrataciones del Estado (OSCE), identificó problemas que dificultan seriamente la aplicación del marco regulatorio de las compras públicas: cambios excesivos; reglamentos que no son lo suficientemente detallados, de ahí la necesidad de confiar en la interpretación de la OSCE para tomar decisiones; regulaciones que no se adaptan a la realidad de las instituciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, especialmente a nivel subnacional; insuficiente información proporcionada por el registro nacional de proveedores; Predominio de normas dirigidas a respetar las formalidades en el proceso de compra sobre el respeto a la finalidad de la compra (OSCE, 2020 p. 32).

Así mismo, la debilidad de los controles internos, ello dentro del Marco de Control Interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) define el control interno como el proceso diseñado para brindar una seguridad razonable de que se logran los objetivos operativos, de informes y de cumplimiento. En esta línea, un sistema de control interno (SCI) se traduce en normas y un conjunto de medidas, actividades, políticas, procedimientos y otros implementados por diferentes actores dentro de una entidad. En el sector privado, generalmente se entiende que el ICS lo lleva a cabo el directorio, el director ejecutivo o la gerencia de la empresa. En un establecimiento público, la figura debe ser la autoridad política, la autoridad administrativa o el responsable de la planificación del establecimiento. Todos estos aspectos han sido claramente señalados por el Contralor General en un documento especial (Shack, 2021) Con el dinero que se habría perdido por la corrupción en 2019, Perú podría haber cerrado el 85 % de la brecha de infraestructura de corto plazo en el sector salud, estimada en 27.545 millones de soles según el Plan Nacional de Desarrollo. A nivel nacional, según cálculos de (Shack, Pérez, & Portugal, 2020), el país habría perdido más de 23 mil millones de soles por corrupción y faltas funcionales en 2019, es decir, prácticamente el 3 % del PBI y el 15 % del PBI por esta ejecución presupuestaria. Si estos daños ahora se observan en situaciones "normales", es plausible pensar que el daño podría ser mucho mayor en tiempos de COVID-19. Esto se sospecha por varias razones, combinadas con problemas previos de ineficiencia del Estado en la gestión de contratos e insuficientes mecanismos de control interno y rendición de cuentas, tales como la disponibilidad de un importante flujo de fondos a transferir para su rápida ejecución; la gran flexibilidad de los procedimientos de contratación; alta volatilidad de precios y disponibilidad de bienes y servicios; entre otros, la reducción del tiempo para tomar decisiones. (Shack, 2021), por ello es necesario un nuevo modelo de control en forma concurrente, pero con un enfoque preventivo (Shack, enero, 2020) Una de las consecuencias más graves de la corrupción de funcionarios es la pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado. Cuando los ciudadanos perciben que los funcionarios no son transparentes y actúan en su propio interés, se sienten desanimados y desconfiados de las instituciones que probablemente les sirvan. Esto puede llevar a una disminución de la participación ciudadana y una menor disposición a cumplir con las leyes y reglamentos gubernamentales. Es sintomática la pérdida de recursos para el desarrollo. Cuando los funcionarios desvían fondos públicos para beneficio propio, esto deja menos recursos disponibles para la inversión en infraestructura, educación, salud y otros servicios públicos. Esto puede tener un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables y marginados de la sociedad. Además, la corrupción puede llevar a cabo una mala gestión y una menor eficacia en la implementación de políticas y programas gubernamentales.

La corrupción tiene un impacto significativo en la economía de un país. La inversión extranjera se desalienta

por la percepción de un ambiente empresarial poco ético, y la corrupción puede aumentar los costos para las empresas que intentan hacer negocios. Esto puede tener un efecto negativo en el crecimiento económico y el empleo. Aunque es atractivo a empresariado corrupto para invertir porque justamente dicho país tiene un engranaje corrupto. La corrupción puede llevar a cabo una competencia desleal y distorsionar los mercados, lo que afecta a los pequeños empresarios y los trabajadores. Así, la corrupción puede tener un impacto en la democracia y el Estado de derecho. Cuando los funcionarios públicos pueden actuar en su propio interés, socavar la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho. La corrupción también puede alimentar la impunidad y debilitar la aplicación de la ley, lo que puede llevar a la criminalidad y la violencia.

En todo el orbe salvo ciertas sociedades en menor medida (Singapur), la corrupción de funcionarios es un problema grave y complejo que afecta a muchos países en todo el mundo. Sus consecuencias son múltiples y pueden tener efectos a largo plazo en el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos. Es importante que los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. En el Perú, la corrupción ha sido un problema crónico que ha afectado tanto a la sociedad civil como a la economía del país. Algunas de las consecuencias más notorias son las siguientes:

**Pérdida de confianza en las instituciones públicas:** La corrupción mina la confianza de la sociedad en las instituciones públicas y en los funcionarios encargados de administrar los recursos del Estado. Esto a su vez debilita la democracia y el Estado de derecho; **Desigualdad social:** La corrupción en la administración de los recursos públicos tiene un efecto negativo en la distribución de la riqueza y en la reducción de la pobreza. La corrupción permite que algunos grupos privilegiados se beneficien a expensas de la mayoría de la población; **Pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado:** La corrupción genera una sensación de impunidad e injusticia en la sociedad, lo que puede llevar a una pérdida de confianza en las instituciones y en el Estado como garantía del bien común (Hofstede, 2018); **Inequidad y exclusión:** La corrupción afecta negativamente a las personas más vulnerables de la sociedad, ya que los recursos que se desvían son los que seguramente serán destinados a mejorar la calidad de vida de la población, como la educación, la salud y la seguridad (Transparencia Internacional, 2018); **Disminución de la inversión y el crecimiento económico:** La corrupción desalienta la inversión y el crecimiento económico, ya que genera incertidumbre y aumenta los costos de hacer negocios en un país (Kaufmann, 2018); **Pérdida de competitividad internacional:** La corrupción también afecta la competitividad internacional de un país, ya que las empresas extranjeras pueden considerar que hacer negocios en un país corrupto no es viable debido a los riesgos asociados (Kaufmann, 2018); **Debilitación en el Estado de derecho:** La corrupción debilita el Estado de derecho, ya que permite que los delitos queden impunes y que las leyes no se cumplan (Hofstede, 2018); Es por ello que, la corrupción de funcionarios tiene graves consecuencias en la sociedad civil y en la economía del Perú. Es necesario tomar medidas para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

### **Impacto de la corrupción en la política y la sociedad**

La corrupción tiene graves consecuencias en la política y la sociedad. En la política, puede generar la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, lo que debilita la estabilidad del gobierno. Además, puede limitar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que hace que los ciudadanos no sepan en qué se están utilizando los recursos públicos. Por otro lado, en la sociedad, la corrupción puede aumentar la desigualdad y la pobreza, ya que los recursos públicos que no serán utilizados para programas sociales se desvían hacia intereses personales (Mauro, 1997). Así, puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, lo que a su vez puede debilitar la transparencia y rendición de cuentas. Además, la corrupción puede reducir la inversión y el crecimiento económico, aumentar la desigualdad y la pobreza, y debilitar el estado de derecho (Mauro, 1997).

## **4. Discusión**

En el ámbito internacional, la corrupción política tiene un impacto negativo en la economía global. En un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016, se estimó que la corrupción reduce el crecimiento económico en un promedio del 1% al año. Además, la corrupción política aumenta la desigualdad económica, ya que los beneficios de la corrupción se concentran en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población sufre las consecuencias negativas. (Banco Mundial, 2020).

En primer lugar, la corrupción política tiene un impacto negativo en la sociedad. Cuando los políticos son corruptos, la confianza de la gente en el gobierno se ve afectado, lo que puede socavar la democracia y el estado de derecho. (Munck, 2018). Los ciudadanos pueden sentir que sus voces no están siendo escuchadas y que el sistema está amañado en contra de ellos. Esto puede llevar a la apatía política ya la falta de participación ciudadana en el proceso democrático. (Hofstede, 2018) Además, la corrupción política también puede afectar la calidad de los servicios públicos, como la educación y la atención médica, ya que los fondos que seguramente destinarán a estos servicios pueden desviarse hacia los bolsillos de los políticos corruptos. En segundo lugar, la corrupción política también tiene consecuencias económicas negativas. Los políticos corruptos a menudo desvían fondos públicos

a proyectos que no son prioritarios o que no benefician al país en su conjunto. Esto puede retrasar el crecimiento económico y perpetuar la pobreza. Además, la corrupción también puede hacer que los inversores extranjeros eviten un país, lo que puede limitar las oportunidades económicas y reducir el desarrollo a largo plazo. (Gutiérrez, 2019). Es que, la corrupción política es un fenómeno que ha afectado a países de todo el mundo durante décadas. Sus consecuencias pueden ser desastrosas, ya que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y debilitan el Estado de derecho. (Delgado, 2019). En el caso específico del Perú, la corrupción política ha tenido consecuencias graves y duraderas en la sociedad y en la economía, pese a esfuerzos sin resultados como el Zar Anticorrupción. (Comisión Nacional de Integridad, 2018) .

En el Perú, la corrupción política ha tenido un impacto significativo en la economía del país. En un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2017, se estimó que la corrupción le cuesta al país alrededor del 5% de su producto interno bruto (PIB) cada año. Esta cifra es alarmante, ya que representa una pérdida significativa de recursos que podrían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de la población. Además, la corrupción política ha impedido el desarrollo de proyectos importantes para el país, como la construcción de infraestructura y la promoción de la inversión extranjera. Se entiende que durante la pandemia sanitaria del COVID 19 el porcentaje es mucho mayor y que pospandemia vemos aún más resultados porcentuales mayores por el mismo silogismo estadístico.

La corrupción política en el Perú como erosionante de la confianza en las instituciones democráticas. La ciudadanía percibe que los políticos están más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar de la sociedad en general. Esto genera una sensación de desesperación y frustración que puede llevar a una desafección total de la política ya una falta de participación ciudadana. En el largo plazo, esto puede tener consecuencias graves para la estabilidad del país y la gobernabilidad democrática. Negativamente al Perú se le ha situado entre los países con mayor corrupción (Mendoza, 2020).

Otra consecuencia importante de la corrupción política a nivel general es el debilitamiento del Estado de derecho y la democracia. La corrupción socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Además, la corrupción política puede llevar a un aumento de la violencia y la inestabilidad política, lo que tiene consecuencias graves para la paz y la seguridad a nivel global. (Transparencia-Internacional, 2021). Es que, la corrupción política ha sido un problema persistente durante décadas. La corrupción ha tenido un impacto negativo en la economía del país y ha erosionado la confianza de los ciudadanos en el gobierno. (Sánchez, 2017) Un ejemplo de ello es el caso Lava Jato, un escándalo de corrupción.

### **Propuestas ante la corrupción política dentro del Estado**

La corrupción es un problema sistémico y complejo que requiere de una solución integral que involucra cambios en la cultura política, fortalecimiento institucional, educación ciudadana y compromiso de todos los actores sociales. A continuación, se presentan propuestas para combatir la corrupción en el Perú: Fortalecimiento de las instituciones y la justicia: Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción, dotándolas de recursos y personal capacitado, y garantizando su independencia y autonomía. También se requiere una justicia más efectiva y ágil en la investigación y sanción de los actos de corrupción. Esta independencia y eficacia del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción implica la capacitación y especialización de los jueces y fiscales en materia de corrupción, la asignación de recursos necesarios y la implementación de medidas que eviten la interferencia política en los procesos judiciales. Creación de juzgados y fiscalías especiales contra la corrupción en el Sector público con facultades de investigación de funcionarios del Poder ejecutivo, judicial y legislativo, independientes piramidalmente de la Corte Suprema dependiendo directamente de la Junta Nacional de Justicia con una conectividad con instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia (Naciones Unidas) y la (ONU, 2021) quien ofreció su cooperación en temas anticorrupción.

Transparencia y acceso a la información: La transparencia y el acceso a la información son herramientas fundamentales para la prevención y detección de la corrupción. Es necesario promover la publicación de información relevante sobre el uso de los recursos públicos, y establecer mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana. Estas medidas como la publicación de presupuestos y balances en línea, la realización de auditorías externas y la creación de organismos de control independientes deberían ser por personal calificado meritocráticamente.

Educación y cultura ciudadana: La educación y la cultura ciudadana son fundamentales para generar conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción y fomentar valores éticos y de responsabilidad social. Es necesario promover la educación cívica y la cultura de la legalidad, así como la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia del uso de los recursos públicos. Se debe propiciar a través de movilización social a que, la ciudadanía debe ser más activa en la lucha contra la corrupción, participante en procesos de control social y vigilancia ciudadana. Para ello, se pueden crear espacios de participación ciudadana en la gestión pública,

como consejos de vigilancia o comités de transparencia.

**Cooperación internacional:** La cooperación internacional es fundamental para la prevención y lucha contra la corrupción, ya que permite el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y recursos. Es necesario fortalecer la cooperación entre países y organismos internacionales en la lucha contra la corrupción, y promover la implementación de acuerdos y convenios internacionales.

**Tecnología y digitalización:** La tecnología y la digitalización pueden ser herramientas muy útiles para prevenir y detectar actos de corrupción, mediante la implementación de sistemas de monitoreo y control de los recursos públicos, y el uso de herramientas de inteligencia artificial y big data para el análisis de la información.

**Modificar el enfoque reactivo en cuanto a la Política nacional de gestión del riesgo legal y presupuestal (Orihuela, 2019)** que el estado le irradia al INDECI como gestión reactiva (primero el daño y después la respuesta) en cuanto a la preparación, respuesta y rehabilitación, dándose paso a una gestión de estimación, prevención y reducción de un riesgo a nivel regional y nacional.

**Ampliar y denotar procesalmente la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas;** por cuanto, se debe establecer la responsabilidad penal de las empresas y organizaciones que participan en actos de corrupción. De esta manera, se podría sancionar a las empresas que se benefician de estos actos y no solo a los funcionarios públicos involucrados.

**Fortalecimiento de los sistemas de denuncia:** Se debe promover y proteger a los denunciantes de actos de corrupción, garantizando su anonimato y seguridad. Además, se deben establecer canales de denuncia de seguros y efectivos, y asegurar que las denuncias sean investigadas y sancionadas, aquí se deba ampliar la capacidad funcional de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, se debe asignar un presupuesto nacional especial significativo.

**Aplicar Reingeniería estatal.** Se debe partir por el diagnóstico administrativo, económico y gerencial de las instituciones públicas (iniciando con los Ministerios y organismos nacionales con autonomía); aplicar la racionalización de operaciones, minimización de costos operativos burocráticos, maximización de utilidades de logros metas cualitativas; y la toma de decisiones dentro de la eficiencia de Calidad Total gerencial, reformulando los ROF y MOF, teniendo como base la suma de personal eminentemente calificado asumiendo modelos eficientes de administración como el del BCRP, es altamente calificado con una significativa eficiencia partiendo de la meritocracia. (Banco Central de Reserva del Perú, 2023).

Sobre la muerte civil es una de las sanciones más severas que se pueden aplicar a un funcionario público corrupto. Se trata de una pena que implica la privación de algunos derechos y beneficios que le son inherentes al cargo, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la imposibilidad de contratar con el Estado. Esta sanción busca evitar que los funcionarios corruptos vuelvan a ocupar cargos públicos y perpetúen su actuar corrupto. Si bien, la aplicación de la muerte civil en el Perú ha sido criticada por ser poco efectiva (como se aplica actualmente) y tener una serie de limitaciones en su aplicación. Por ejemplo, en muchos casos los funcionarios corruptos lograron evadir la sanción al transferir sus bienes a terceros o constituir empresas para seguir contratando con el Estado. Para lograr una aplicación más rigurosa de la muerte civil, se podrían implementar las siguientes propuestas:

**Ampliar el plazo de la sanción:** Es significativo modificar el plazo para casos graves de corrupción de funcionarios a Cadena Perpetua (sin tener posibilidad de excarcelaría por salud, ancianidad u otro).

**Fortalecer la investigación y seguimiento:** Es importante que se realicen investigaciones rigurosas y se hagan seguimientos a los funcionarios sancionados para garantizar que no sigan ejerciendo cargos públicos o contratando con el Estado.

**Crear un registro de sancionados:** Es importante crear un registro público de los funcionarios sancionados con Muerte Civil para que las instituciones públicas y privadas tengan acceso a esta información y no contraten a estos funcionarios si es que no reciben Cadena Perpetua por la graduación y que este registro sea público.

**Sancionar a terceros cómplices:** También se debe sancionar a las personas o empresas que colaboran con los funcionarios sancionados para evadir la muerte civil, como los que adquirieron bienes a nombre de los funcionarios corruptos, implica la modificación del Código Penal.

**Mayor control de la Contraloría General de la República:** La Contraloría debería tener un mayor rol en la supervisión de los procesos de contratación y en la fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos. Debe seguir la misma línea gerencial pública como del BCR.

La muerte civil es una medida necesaria para combatir la corrupción en el Perú, pero se requiere de una mayor

rigidez en su aplicación. Las propuestas planteadas podrían ayudar a mejorar la eficacia de esta sanción y, por ende, a reducir los niveles de corrupción en el país, desde una perspectiva criminológica y desde la concepción penal sancionatoria y preventiva.

## 5. Conclusiones

La corrupción es un problema que afecta a la sociedad en general y que tiene graves consecuencias en la política y la economía. Para combatirla es necesario fortalecer las instituciones y la transparencia, así como fomentar una cultura ética y de valores en los líderes políticos. La corrupción no es un problema que se pueda solucionar de la noche a la mañana, pero es necesario trabajar en conjunto para reducir su impacto en la sociedad. La corrupción de los funcionarios públicos en el manejo del presupuesto gubernamental tiene graves consecuencias para la sociedad. La corrupción mina la confianza en las instituciones públicas, reduciendo la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades y afecta el uso eficiente de los recursos públicos. Es necesario implementar medidas de transparencia y fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción para abordar este problema de manera efectiva. En el caso del Perú, la corrupción ha sido un problema persistente que ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país. Las causas de la corrupción son complejas y multifacéticas, y varían de un país a otro. Es necesario implementar medidas efectivas para abordar las causas y consecuencias subyacentes de la corrupción, como la falta de transparencia, la falta de una cultura ética sólida y la falta de regulación y supervisión adecuada; el cómo, se plantea su causticidad a nivel normativo y ejecutivo como la Muerte Civil a funcionarios corruptos y la deshonra pública.

## 6. Referencias bibliográficas

- Banco Central de Reserva del Perú. (2023). Plan Estratégico Banco Central de Reserva 2023-2024. BCRP.
- Banco Mundial. (2020). COVID-19: Impacto en la educación y respuesta de política pública.
- BBC. (2020). Ventiladores para Perú: el millonario escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Martín Vizcarra en plena pandemia de coronavirus.
- CNN-español. (2023). Corte de EE.UU. anula detención del expresidente Toledo mientras se resuelve apelación sobre su extradición a Perú.
- Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. (2019). Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- Comisión Nacional de Integridad. (2018). Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
- Contraloría General de la República. (2019). Plan Nacional de Control 2019-2021.
- Delgado, R. (2019). La corrupción en el Perú: causas, consecuencias y soluciones. *Revista de Derecho PUCP*(82), 267-292.
- Durand, F. (2019). Odebrecht. La empresa que capturaba gobiernos. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- El comercio. (2020). Caso PNP: Marisol Pérez Tello pide explicaciones sobre compras irregulares de la Marina.
- Fondo Monetario Internacional (FMI). (2018). *Combatir la Corrupción: Del Compromiso a la Acción*. Documento de política del FMI.
- Gutiérrez, F. (2019). La corrupción en el Perú y su impacto en la democracia. *Revista Debates en Sociología*(46), 127-143.
- Hofstede, G. (2018). La corrupción y sus efectos en la sociedad. *Revista Internacional de Ética y Economía*(117), 111-126.
- IDEHPUCP. (s.f.). Humala – Heredia. Observatorio de casos anticorrupción PUCP.
- INEI. (2022). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. Instituto nacional de estadística e informática.

- Mendoza, R. (2020). ¿Por qué el Perú es uno de los países más corruptos de América Latina? BBC News Mundo.
- Munck, G. (2018). Corrupción y democracia en el Perú. *Revista de Ciencia Política*, 38(2), 393-407.
- Naciones Unidas. (s.f.). Corte Internacional de Justicia.
- ONU. (2021). La ONU ofrece cooperación técnica a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Perú.
- Orihuela, J. (2019). ¿Reconstrucción sin instituciones? Gobierno de los desastres siconaturales en el Perú 1997-2019. Grupo Propuesta Ciudadana.
- Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. (2022). Informe sobre Corrupción durante el Estado de Emergencia por Covid-19 en el Perú. PPEDC.
- Sánchez, J. (2017). El impacto de la corrupción en el desarrollo económico y social del Perú. *Revista Digital de Derecho Administrativo*(7), 101-120.
- Shack, N. (2021). El control en los tiempos de Covid-19: Hacia una transformación del control. Contraloría General de la República del Perú. Lima, Perú. CGRP.
- Shack, N. (enero, 2020). El Modelo de Control Concurrente como Eje Central de un Enfoque Preventivo, Célebre y Oportuno del Control Gubernamental en el Perú. *Gaceta Jurídica S.A.*
- Shack, N., & Porras, H. (2020). Monitores Ciudadanos de Control Un mecanismo de Control Social. Lima, Perú. Universidad César Vallejo S.A.C.
- Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L. (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú. Transparencia Internacional. (2023). Percepción de la Corrupción.
- Transparencia-Internacional. (2021). Índice de Percepción de la Corrupción 2020.